S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 89
O R D I N A R I A
MARTES 28 DE AGOSTO DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cinco minutos del martes veintiocho de agosto de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número ochenta y ocho, ordinaria, celebrada el lunes veintisiete de agosto de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el veintiocho de agosto de dos mil doce:

II. 1. 134/2012

Amparo en revisión número 134/2012 promovido por ***** , en contra del acto del Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, consistente en el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil doce, en los autos de la causa penal 751/2010. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , en contra de los actos y autoridad señalados en el resultando primero, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria”*

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que en la sesión anterior se hicieron diversas manifestaciones respecto de la contestación al agravio de la quejosa en el que se duele de la falta de declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, en el sentido de que la sentencia se limitó al acto de aplicación.

Asimismo, se precisó que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 133 constitucionales los juzgadores de amparo pueden inaplicar un precepto legal cuando adviertan su inconstitucionalidad sin que esto se deba reflejar en los puntos resolutivos y precisó que aun cuando existe la facultad para realizar un control concentrado, conforme al artículo 1º constitucional, a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Radilla Pacheco y a la resolución del Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010, los jueces federales pueden también realizar control de convencionalidad en casos como el que se presenta, en el que se solicita la declaratoria de inconvencionalidad por el quejoso, lo que será congruente al no señalarse la norma cuyo análisis se pretende como acto destacado ni como autoridad responsable a quien la haya emitido.

Sostuvo que en la sentencia recurrida se realizó una interpretación del artículo 13 constitucional y que en los argumentos respectivos se señaló que los razonamientos que se tomaron en cuenta se sustentan en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Radilla, de tal manera que el juez se limitó a aplicar el referido criterio para concluir que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, vulnera lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, de tal manera que el juzgador confrontó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el referido numeral, lo que

constituyó un control de convencionalidad y no de constitucionalidad y resultó innecesario el reflejo de esta determinación en los puntos resolutive, ya que no puede llegar más allá de la inaplicación de la señalada norma jurídica; de tal manera que al momento que el juzgador realiza un control difuso de convencionalidad y determina que un precepto es contrario a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la propia Convención, entonces analizará el acto reclamado, prescindiendo de la aplicación de dicho precepto legal.

Por ende, consideró que no se está ante un planteamiento de constitucionalidad, sino de convencionalidad, por lo cual, no existe incongruencia alguna en los puntos resolutive de la sentencia y, por tanto, no es necesario reponer el procedimiento pese a que la quejosa se encuentre privada de su libertad.

Además, consideró que si se sostuviera que los jueces federales sólo pueden realizar control de constitucionalidad concentrado, entonces los jueces ordinarios tendrían mayores facultades de control constitucional que los jueces de amparo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que estos asuntos deben abordarse a la luz de la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del citado expediente varios, toda vez que se atrajeron a este Alto Tribunal para sentar jurisprudencia

obligatoria para los tribunales, pese a que al analizarse el referido asunto sostuvo que no era necesario integrarla dado que los jueces ya estaban obligados por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el criterio sostenido por este Alto tribunal, ya que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que el Estado Mexicano fue parte deben ser aplicadas por los juzgadores mexicanos; sin embargo, para mayor seguridad, se atrajeron estos asuntos reasumiendo competencia para fijar jurisprudencia a la luz del caso Radilla, además de que se están analizando en cumplimiento de la referida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisó que en este caso se pretende determinar si puede actualizarse un control difuso o incidental de convencionalidad en un medio de control concentrado de constitucionalidad y recordó que el sistema procesal constitucional mexicano tiene mecanismos de control concentrado como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales respecto de las que sólo conoce este Alto Tribunal, otros como el juicio de amparo, en los que participa todo el Poder Judicial y, por último, los medios de impugnación en materia político-electoral de los que sólo conoce el Tribunal Electoral.

Indicó que el nuevo bloque de control consistente en el control difuso o incidental se encuentra en manos de todos los jueces del país y no sólo en manos de los federales o de

los locales, en tanto que en los instrumentos de control concentrado también se realiza un control incidental o difuso, como sucede respecto del amparo directo cuando se impugna una sentencia argumentando que la ley que aplicó el tribunal es inconstitucional.

Consideró que si bien los órganos jurisdiccionales son típicos órganos de control constitucional y los jueces constitucionales en sentido estricto pueden realizar este control, por mayoría de razón pueden realizar un control difuso o incidental correspondiente a los jueces ordinarios.

Estimó que sería inapropiado sostener que sólo los jueces locales o los tribunales administrativos pueden realizar un control incidental y precisó que el asunto se puede abordar analizando si el artículo 57 del Código de Justicia Militar es o no un acto reclamado y recordó que el quinto concepto de violación señala: “Pido la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, toda vez que contraviene los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Sostuvo que en caso de que el juez hubiera analizado la demanda de manera conjunta, pudo determinar que había una ley como acto reclamado y requerir al quejoso para que aclarara si la señalaba como tal y, en su caso, llamar a juicio al órgano que la expidió, en tanto que en el juicio las autoridades legislativas pueden hacer valer diversos argumentos como el relativo a que no se aplicó la ley en el

caso concreto, o no se está ante los supuestos de la sentencia.

Consideró que no debe reponerse el procedimiento, pues el juez *a quo* estimó que el referido artículo 57 no se reclamó y aquél pudo interpretar adecuadamente la intención del quejoso, pues éste estableció la inconvencionalidad del precepto en relación con su aplicación en los autos de formal prisión, de tal manera que al aplicar la sentencia del caso Radilla, así como el expediente varios citado, resolvió la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad del referido precepto y determinó inaplicarlo, sin que fuese necesario establecerlo de esta manera en los puntos resolutivos, aunado a que sería inconveniente para el quejoso la reposición del procedimiento cuando se cuenta con los elementos necesarios para resolver el asunto.

Por ende, consideró que través del juicio de amparo y de cualquier otro medio de control concentrado, puede realizarse un control difuso o incidental de constitucionalidad o convencionalidad y, además, que en estos casos no es necesario llamar a juicio a las autoridades que emitieron la ley respectiva, pues se está ante una inaplicación cuando el acto reclamado no es la ley, sino la resolución impugnada en un proceso, toda vez que en el control concentrado se impugna de manera directa la norma de carácter general, en tanto que el control difuso lo impugna de manera indirecta a través de la impugnación de la resolución.

Estimó que no es posible establecer una distinción tajante entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad toda vez que la Constitución, así como los tratados internacionales, son el parámetro de validez de las normas del orden jurídico mexicano y señaló que independientemente de que algunos señores Ministros estimen que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tuvieran una jerarquía inferior a la Constitución, todas las demás normas del orden jurídico tendrían que respetarlos, lo que implica que cualquier acto de autoridad o ley del Estado Mexicano que vulnere un tratado internacional o un derecho humano de fuente internacional, también viola la Constitución, por lo que consideró que sí existe un control constitucional *lato sensu*, que incluye el control constitucional estricto que es sólo de la Constitución, además de que el control de convencionalidad se puede actualizar de manera pura analizando sólo la Convención, pero necesariamente si un tratado viola esta última, estaría violando también la Constitución.

Por ende, independientemente de la forma en que resolvió el juez, se está ante una atribución de los juzgadores además de que la técnica del amparo debe estudiarse a la luz del nuevo marco constitucional, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la resolución de este Alto Tribunal en el caso Radilla para convertirse en un instrumento que logre los fines garantistas del amparo, con la adecuación de este juicio

consistente en insertar el control difuso o incidental en el orden jurídico mexicano, por lo que se manifestó a favor del sentido del proyecto.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que la resolución del citado expediente varios no es una sentencia respecto del caso Radilla pues no existieron partes involucradas.

Recordó lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1º constitucional y sostuvo que de éste no se desprende la competencia al juez de amparo para llevar un control difuso.

Indicó que conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo que ordena aclarar la demanda ante alguna irregularidad, ante la imprecisión de la demanda y a la referencia expresa de los vicios que el quejoso atribuyó al artículo 57 del Código de Justicia Militar, el juez de Distrito debió prevenirlo para regularizar el procedimiento, lo que no fue así. Además, consideró que se violan los artículos 5, fracción II y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que sin llamar a las autoridades legislativas a juicio, se estaría declarando la inconstitucionalidad de un precepto, violando la garantía de audiencia, así como el diverso 79 de la Ley de Amparo que ordena la corrección de incongruencias planteadas en el recurso de revisión, como sucedió en el caso concreto entre los considerandos y los puntos resolutivos

Señaló que la consulta mezcla sin sustento las reglas del amparo directo y del indirecto y sostuvo que no existe un bloque de la Constitución, pues ésta no corre aparejada de Convención alguna y recordó que la primera regla de interpretación de los tratados internacionales es el principio de subsidiaridad e indicó que no existen normas en los tratados internacionales más beneficiosas a la persona que no se encuentren previstas en la propia Constitución.

Recordó los argumentos señalados por los señores Ministros en la sesión anterior y señaló que el artículo 133 constitucional no ha sido modificado y sostuvo su postura consistente en que debe devolverse el asunto al juez de Distrito para que se regularice el procedimiento.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó que la demanda es ambigua y que el juez de Distrito en su sentencia le dio un mal tratamiento, estableciendo un planteamiento de constitucionalidad del artículo 57 del Código Castrense, siendo que sólo se señaló que se trataba de un problema de convencionalidad que ameritaría una reposición del procedimiento, ya que si se sostuviera que el juez de Distrito hizo un pronunciamiento y declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, tendría que llamarse a juicio a las autoridades y reponer el procedimiento o, en su defecto, requerir al quejoso para que manifieste si pretendió plantear la inconstitucionalidad del artículo 57 del referido código o si lo aludió como un problema de convencionalidad.

Al respecto, estimó que de considerarse sólo un problema de convencionalidad, se estará ante un problema de legalidad, respecto de lo cual, este Alto Tribunal ha sostenido que los tratados internacionales tienen una jerarquía mayor que las leyes federales, con independencia de la postura que tenga sobre dicho argumento en el que no participó, de tal manera que consideró que la violación de un tratado internacional no implica violar la Constitución.

Consideró que lo anterior podría llevarse a cabo como control dentro del juicio de amparo siempre que no se haga un pronunciamiento de constitucionalidad, de tal manera que estaría de acuerdo en declarar la inaplicación del referido precepto castrense al ser contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sin declarar su inconstitucionalidad ni llegar a la reposición del procedimiento, pues de lo contrario, se excedería lo resuelto en el caso Radilla en su párrafo trescientos treinta y nueve en el sentido de que el ejercicio del análisis de constitucionalidad de las normas debe llevarse a cabo dentro del margen de las competencias y destacó que las competencias en amparo para declarar la inconstitucionalidad de una ley requieren de ciertos procedimientos que no siguió el juez de Distrito.

Por tanto, se manifestó en el sentido de que se corrija la referida sentencia en suplencia de la queja sin necesidad de reponer el procedimiento, para llevar a cabo un análisis de convencionalidad como un aspecto de legalidad y se

declare que el referido precepto es contrario al Pacto de San José y, por ende, no debió aplicarse en ese sentido en el caso concreto, para conceder el amparo con los efectos relativos a la competencia del juez Militar respecto de los jueces ordinarios.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que la confusión en la sentencia del juez de Distrito obedeció probablemente a que se trata de temas novedosos que imponen la necesidad de la construcción de un nuevo modelo de análisis e interpretación constitucional, lo que podría tener solución.

Recordó que la sesión anterior se abordaron diversos temas el sustantivo, al cual se referirá, el de la legitimación del Ministerio Público y el relativo a cómo determinar si se trata de un problema de convencionalidad o de inconstitucionalidad, pues de ser un problema de esta última naturaleza, conforme a las reglas del juicio de amparo debería reponerse el procedimiento.

Sostuvo que el agravio del recurso de revisión que se transcribe en la foja seis del proyecto es en el sentido de que el promovente se queja de que el juez fue incongruente porque habiendo declarado la inconstitucionalidad del precepto, no lo reflejó como un punto resolutivo y señaló que la posición que mantuvo en el primer asunto en el que participó es similar a la de los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea respecto de que hay una

resolución aprobada para no entrar en el tema relativo a que se trata de una decisión del Tribunal Pleno al resolver el expediente varios 912/2010.

Señaló que en este último asunto, se determinó el alcance de la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar; dio lectura a los párrafos cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de la resolución en comento, precisando que se manifestó en el sentido de dicha mayoría.

Sostuvo que conforme a dichos párrafos, el referido precepto castrense es incompatible con el artículo 13 de la Constitución; además, se sostuvo que conforme al artículo 1º de la Norma Fundamental, el fuero militar no puede operar bajo ninguna circunstancia que vulnere derechos humanos civiles, en tanto que también se acordó que esta interpretación deberá observarse en todos los casos futuros que sean del conocimiento de este Alto Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas, independientemente de la vía por la cual el asunto llegue a ser del conocimiento de estos órganos y, además, se ordenó que tanto los jueces como los magistrados remitieran a este Alto Tribunal todos los asuntos relacionados con ese tema, respecto de lo que manifestó que el asunto debe abordarse conforme a lo resuelto en el expediente varios 912/2010, así como con los criterios sostenidos en éste, por lo que estimó que dicho planteamiento se encontraba resuelto.

Señaló que en el caso el promovente alega que el juez fue incongruente en la sentencia, respecto de lo cual, consideró que efectivamente se está ante un problema sobre sus consideraciones, pues aparentemente se podría jugar con la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad; sin embargo, consideró que parecería que el juez se pronunció por la estricta inconstitucionalidad del precepto y dio lectura, en lo conducente, a la página trece del proyecto, destacando que “Con base en los argumentos expuestos con anterioridad, el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar vulnera lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta Magna y, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo solicitado por la quejosa, sin que sea obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de la tesis 1ªJ.147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en dicho análisis se analizó única y exclusivamente la interpretación legal de la norma que dio origen a este juicio de amparo, -no así su constitucionalidad— máxime que las consideraciones que la sustentan se emitieron con anterioridad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación”.

Posteriormente se refirió a los efectos de la sentencia y al punto resolutivo del fallo que indica: “La Justicia de la Unión ampara y protege a *****”, en contra de los actos

y autoridad, por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto”.

Consideró que el juez de Distrito se pronunció sobre la constitucionalidad del precepto y lo declaró inconstitucional, lo que de estimarse en este sentido, obviaría el resto de la discusión sobre la convencionalidad y la inconvencionalidad, por lo cual, no sería necesario reponer el procedimiento para el efecto de que la autoridad competente que expidió la ley en uso de ciertas facultades extraordinarias sería el Ejecutivo Federal e indicó que de la revisión legislativa de la referida ley, se desprende que ésta no ha tenido reformas.

El señor Ministro Valls Hernández consideró que el pronunciamiento de inconstitucionalidad que hace el juez de Distrito deriva de lo resuelto por esta Suprema Corte en el referido expediente varios 912/2010 y del cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla, toda vez que constituye la aplicación de un criterio emitido por este Alto Tribunal en el que se declara la incompatibilidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, con el diverso 13 constitucional, ya que los autos de formal prisión reclamados se fundamentan en el referido precepto, de tal manera que al declararse incompatible con el artículo 13 constitucional, los actos que se funden en éste deberán correr la misma suerte.

Por tanto, precisó que aun cuando no se hubiera reclamado el referido precepto del Código castrense, el juez

de Distrito no pudo haber pasado inadvertido que en éste encuentran fundamento los actos reclamados y que este Alto Tribunal declaró su inconstitucionalidad, tomando en cuenta el párrafo cincuenta y tres del citado expediente varios respecto de orientar las subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como el considerando séptimo relativo al control de convencionalidad ex officio en el marco del modelo general de control establecido constitucionalmente, el cual permite el ejercicio de un control difuso por parte de los jueces de Distrito en el que no hay una declaración de inconstitucionalidad, sino una inaplicación del precepto de que se trate, como lo hizo el juez de Distrito en la sentencia recurrida, ya que no se encontraba en posibilidad de ejercer un control concentrado de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad del precepto al no haber sido reclamado; sino que se encontró obligado a ejercer un control de convencionalidad y de constitucionalidad en el que de acuerdo con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de este Alto Tribunal respecto de la restricción de la jurisdicción militar, lo inaplicara en el caso concreto, por lo que entendiendo la aplicación de esta forma, se manifestó a favor del sentido del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que en el caso Mc Cain que formuló un voto particular, aún no se reformaba

la Constitución ni se había dictado la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las condiciones que prevalecieron en aquél asunto y las que se presentan en éste, son distintas.

Agregó que en dicho voto particular sostuvo que no entraba a una discusión sobre jerarquía de tratados, a sabiendas de que se habían presentado las iniciativas de la reforma constitucional y conociendo de esas iniciativas, por lo que siendo tan abrumadora la cantidad de cambios normativos y de resoluciones en materia de derechos humanos, estimó innecesario hacer mayor comentario al respecto.

Manifestó interrogantes respecto de la necesidad de que expresamente en los recursos que se hayan generado en el orden jurídico mexicano se agoten todas las modalidades procesales para el efecto de que esa sentencia se incorpore y genere sus efectos o si lo debe hacer este Alto Tribunal, con independencia de las cuestiones procesales al tener la determinación de que un precepto ha sido anulado, ante lo cual, consideró que no es necesario esperar pues se tiene un expediente abierto y un juicio de carácter concentrado con la modalidad de declarar la invalidez de las normas que se consideren en esos términos en los puntos resolutivos correspondientes, por lo cual estimó que en cumplimiento a la sentencia de mérito debe declararse que el precepto debe invalidarse para el orden jurídico mexicano y no sólo para el presente asunto.

Además, recordó algunos precedentes en los cuales, los tribunales internacionales aun frente a la condición de cosa juzgada, deben revocar sus determinaciones a efecto de incorporar el sentido de la decisión que se estableció por un orden jurídico que tiene la capacidad de verificar la validez de las normas de un orden jurídico nacional a través de su tribunal, por lo que sin necesidad de suplir ni de llevar un control difuso, consideró que este Alto Tribunal debe adecuarse a la condena que se estableció de un precepto constitucional y hacer la declaración correspondiente en esa modalidad dentro del proceso específico que se encuentra abierto, por lo que se manifestó en contra del sentido del proyecto.

A las trece horas con cinco minutos el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con treinta minutos.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad y el control difuso tienen una regulación distinta y una forma específica de aplicación.

Precisó que el artículo 1º constitucional constriñe a este Alto Tribunal a la realización de un control de constitucionalidad y de convencionalidad respecto de los derechos humanos contenidos en la Constitución así como en los tratados internacionales, en tanto que si en el juicio de amparo se impugna la inconstitucionalidad de una ley, se

está frente a un control de constitucionalidad que implica el comparativo de la referida ley con alguna disposición de la Constitución para definir si es o no acorde con ella, lo que debe reflejarse en un punto resolutivo para efectos de lo previsto en el artículo 107 de la Norma Fundamental.

Indicó que en el caso se está ante una ley expedida por autoridades competentes que resulta contraria a la Constitución, lo que deberá arrojar un resolutivo para el efecto de la declaración general correspondiente.

Señaló que conforme a lo previsto en el artículo 1º constitucional, el control de convencionalidad es obligatorio, lo que implica que la ley que se compara, lo hará también en relación con los tratados internacionales para que se determine si es o no contraria a estos últimos.

Manifestó no coincidir con el argumento relativo a que no existan diferencias entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, pues en el primero se realiza una comparación con la Constitución y en el segundo, con los tratados internacionales, lo que implica una diferencia tajante.

Por ende, consideró que en el control de convencionalidad no se presenta un problema de constitucionalidad sino de legalidad, pues los tratados internacionales no están al mismo nivel de la Constitución sino debajo de ésta, pues en ningún momento se ha acordado que la Constitución hubiera perdido el principio de

supremacía constitucional, así como tampoco que se ha reformado el artículo 105 de la Norma Fundamental que permite la posibilidad de que los tratados internacionales sean sometidos al tamiz de constitucionalidad, es decir, comparados con la misma para determinar si son o no acordes con ésta, además de que conforme a lo previsto en los artículos 107 constitucional y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo se puede pasar por un tamiz constitucional, si un tratado internacional resulta violatorio de algún precepto de la Constitución en perjuicio de un particular, lo que implica que los tratados internacionales no se encuentran al mismo nivel que la Constitución, toda vez que pueden ser juzgados para determinar si son o no acordes con la misma.

Señaló que el artículo 1º de la Constitución prevé la obligación de llevar a cabo un control de convencionalidad, tomando en cuenta que las limitaciones y restricciones se encuentran en la propia Constitución y no en los tratados internacionales y recordó que el Convenio de Viena prevé que un tratado internacional puede dejar de aplicarse cuando esté en contra de algún artículo de su ley fundamental, por lo que incluso el derecho internacional reconoce la supremacía de las leyes fundamentales de los Estados que suscriben aquéllos .

Precisó que conforme al artículo 1º constitucional a través del principio pro persona, debe hacerse un comparativo de la norma impugnada y de los tratados

internacionales, no porque éstos se encuentren por encima de la Constitución, sino porque conforme a dicho principio, debe aplicarse la norma más benéfica para la persona. Por tanto, se manifestó en contra de sostener que si el juez hizo un control de convencionalidad, implicará la inaplicación del artículo 57 del Código Castrense.

Agregó que el propio artículo 1º constitucional prevé el control difuso de la Constitución, respecto del cual, este Alto Tribunal determinó por mayoría de votos que debe llevarse a cabo incluso, por los jueces ordinarios y recordó que en ese asunto votó en contra pues consideró que sólo los jueces federales tienen la posibilidad de establecer la inconstitucionalidad de leyes a través del control de regularidad constitucional.

Señaló que el control difuso procede cuando nadie lo está haciendo valer, de tal manera que en un juicio de amparo, si nadie hace valer la inconstitucionalidad de la ley y el juez considera que la ley es inconstitucional y que debe inaplicarla al caso concreto en uso del control difuso, válidamente puede hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º constitucional, pero para que se lleve a cabo, sería necesario que no se hubiere reclamado la ley, pues si la ley se reclamó se estará ante reglas diferentes, es decir, ante las reglas del juicio de amparo. Además, en caso de que el juez de Distrito oficiosamente lleve a cabo un control difuso de la Constitución para inaplicar una ley, dicha inaplicación no debe reflejarse en un punto resolutivo porque

sólo se inaplica respecto del caso concreto, pero si se lleva a cabo en un juicio de amparo indirecto en el que vagamente se señaló el precepto, no regirán las reglas del juicio de amparo.

Señaló que en caso de no hacerse valer y que el juez de manera oficiosa lleve a cabo un control difuso de la Constitución e inaplique el precepto al considerar que determinado artículo es violatorio, no se tendría que señalar en un punto resolutivo ni que llamar a juicio a la autoridad que emitió el acto correspondiente, por lo que sostuvo que en cada uno de estos casos operan reglas distintas y se manifestó en contra del proyecto y en el sentido de que no deben confundirse los términos.

Consideró que existe una incongruencia en la interpretación que realizó este Alto Tribunal de la sentencia Radilla porque, por una parte, se sostiene que rige para todos los casos que deba juzgar el Poder Judicial y aplicarse como una jurisprudencia que obliga a todos los juzgadores a llegar a hacer esta determinación; en tanto que por otra parte, se votó por mayoría de seis votos que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios sino sólo orientadores, de tal manera que consideró que se estaría suplantando al Constituyente Permanente a través de una determinación de un Tribunal Internacional.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que en ningún momento afirmó que el control de convencionalidad sea lo mismo que el control de constitucionalidad, sino que en México, el control de convencionalidad implica un control de regularidad constitucional; además, de que no es exacto sostener que el control difuso se lleve a cabo cuando las partes no lo solicitan y, por último, indicó que al resolver el citado expediente varios, se acordó por mayoría de votos que las sentencias que condenan al Estado Mexicano son obligatorias en sus términos; sin embargo, las sentencias en las que México no es parte, no le son obligatorias.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que el proyecto se hace cargo de la sentencia del juez de Distrito sin confundir los términos.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia manifestó que la jurisprudencia de este Alto Tribunal sostiene que el contraste entre la Constitución y los Tratados Internacionales no es tema de constitucionalidad, en tanto que en precedentes se indica que como el efecto de declarar que una ley no se apega al tratado es similar al de la inconstitucionalidad de leyes, el Pleno debe atraer el asunto, por lo que existe una clara distinción aunque produce un efecto similar a la inconstitucionalidad de leyes.

Precisó que el juez de Distrito planteó el contraste entre el artículo 57 del Código Castrense y la Convención Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo,

excediendo la litis, hizo algunos pronunciamientos de inconstitucionalidad en el sentido de que el referido artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar vulnera el diverso artículo 13 de la Constitución en concordancia con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que consideró una incongruencia, toda vez que para declarar la inconstitucionalidad de una ley en amparo indirecto es necesario tenerla como acto reclamado y llamar a juicio a las autoridades que la emitieron para que estén en posibilidad de defender su constitucionalidad.

Agregó que cuando el órgano revisor advierte incongruencias en una sentencia que pudieran generar confusiones, debe corregirla de oficio, por lo que propuso hacerlo en ese sentido, para reconocer que el juez violó el principio de congruencia conforme al cual debió resolver exactamente sobre lo pedido, siendo suficiente el pronunciamiento que hizo respecto del desajuste del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, con la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que se deberá reiterar y expulsar de la sentencia en revisión toda manifestación sobre interpretación directa del artículo 13 constitucional, para sólo llevar un control de convencionalidad, respecto de lo cual, la mayoría de los señores Ministros han manifestado que lo resuelto en el caso Radilla es obligatorio para el Estado Mexicano y manifestó que el término “inaplicación de la norma” es sólo cuestión de palabras; sin embargo, consideró que no debe hacerse un

pronunciamiento sobre ello en un punto resolutivo concreto en el que se sostenga que la norma es inconstitucional, por lo que en el mismo considerando podría estudiarse el agravio del Ministerio Público para resolver los temas de fondo, quedando pendiente únicamente el tema de los efectos. Recordó que debe darse celeridad al proceso toda vez que la inculpada se encuentra privada de su libertad.

El señor Ministro Aguirre Anguiano dio lectura a algunos párrafos del mencionado voto particular del señor Ministro Cossío Díaz y consideró que dicha remisión guardaba relación con el asunto que se discute en esta sesión.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que se haría cargo de la incongruencia del juez de Distrito en los términos propuestos por el señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza indicó que la referida propuesta podría llevar eventualmente al análisis de otros agravios para que la próxima sesión se aborde el tema relativo a los efectos.

El señor Ministro Franco González Salas consultó si el engrose se elaborará en los términos propuestos por el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, lo que fue afirmado por la señora Ministra ponente.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que en la sesión anterior sostuvo que el agravio es infundado; sin embargo, no comparte la propuesta del señor Ministro Ortiz Mayagoitia, toda vez que en la corrección de la incongruencia, la sentencia del juez quedaría sin argumentos, ya que esta se elaboró alrededor de la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar en contraste con el artículo 13 de la Constitución, por lo que manifestó tener salvedades respecto de la propuesta.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que la expulsión de la porción que el juez declara la inconstitucionalidad llevará a realizar un nuevo estudio para sostener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el artículo 57 del Código de Justicia Militar viola la Convención, ya que se está dejando sin contenido la sentencia, lo que tendrá que hacerse como una modificación de oficio a que se obliga este Alto Tribunal por el recto estudio del argumento planteado en la demanda y precisó que en todo caso, también podría someterse a votación si se coincide en declarar que el agravio es infundado.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando quinto consistente en declarar infundado el agravio respectivo, corregir de oficio la incongruencia del fallo recurrido y declarar la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, contra las consideraciones, Pardo

Sesión Pública Núm. 89

Martes 28 de agosto de 2012

Rebolledo, contra las consideraciones, Aguilar Morales, Valls Hernández, con reservas, Sánchez Cordero de García Villegas, con reservas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza, con reservas. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos y Franco González Salas votaron en contra.

Los señores Ministros reservaron su derecho para formular, en su caso, sendos votos particulares y concurrentes.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves treinta de agosto del presente año, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las catorce horas con diez minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.